



Asamblea General

Distr. general
28 de diciembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
37º período de sesiones
18 a 29 de enero de 2021

Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos*

Australia

* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.



I. Introducción

1. El compromiso incesante de Australia con la protección y promoción de los derechos humanos se refleja en la solidez de nuestras leyes, políticas e instituciones nacionales y en nuestra activa participación y labor de promoción en el ámbito internacional. Australia se enorgullece de su contribución a la fundación de las Naciones Unidas y al establecimiento del marco internacional de derechos humanos. El estreno de Australia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2018-2020 es un reflejo de su constante entrega a este marco. La legislación e instituciones australianas tienen por objeto proteger los derechos humanos y fomentar un debate público sano sobre las cuestiones de derechos humanos.
2. Desde el segundo ciclo del examen periódico universal (EPU) en 2015, Australia ha alcanzado logros importantes en lo que se refiere a la efectividad de los derechos humanos. Entre ellos, cabe citar las importantes inversiones para hacer frente a la violencia familiar y doméstica, la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
3. La enfermedad por coronavirus (COVID-19) plantea nuevos desafíos en lo que respecta a la protección de los derechos humanos en Australia. No obstante, nuestras sólidas instituciones democráticas han velado por que nuestra respuesta mantenga un cuidadoso equilibrio entre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros derechos, como la libertad de circulación, cuya restricción temporal podría hacerse necesaria. Se ha prestado especial atención a los derechos de las personas con vulnerabilidades singulares.
4. Australia celebra la oportunidad de participar en el tercer ciclo del EPU y de examinar los logros y las oportunidades de mejora en lo que se refiere a la protección y promoción de los derechos humanos.

II. Metodología y proceso de consulta

5. El presente informe fue preparado por el Gobierno de Australia en colaboración con los Gobiernos de los estados y territorios del país.
6. En el informe se resumen las novedades en los marcos de derechos humanos de Australia (parte III), seguidas de las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones aceptadas por Australia en el segundo ciclo del EPU, que tuvo lugar en 2015 (parte IV). Puesto que el informe se centra en el período comprendido entre 2015 y 2020, las cuestiones relacionadas con la COVID-19 se tratan en la sección “Cuestiones nuevas y emergentes” (parte V). El informe está acompañado de tres anexos que deben leerse conjuntamente con él. En el **anexo 1** se expone el estado de aplicación de todas las recomendaciones del segundo ciclo del EPU. En los **anexos 2 y 3** se resume el estado de aplicación de las promesas voluntarias formuladas por Australia durante el segundo ciclo del EPU y en el marco de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos.
7. El Gobierno de Australia ha celebrado consultas con la Comisión de Derechos Humanos de Australia y con organizaciones no gubernamentales (ONG) en relación con el proyecto de informe. En el Foro de ONG sobre Derechos Humanos de 2019, organizado cada año por Departamento del Fiscal General, se examinó una versión preliminar del informe, y en julio de 2020 se publicó un proyecto de informe a fin de recabar observaciones al respecto. El Gobierno australiano recibió 22 comunicaciones por escrito y celebró reuniones con otras 16 ONG. Una coalición de ONG recibió fondos del Gobierno australiano para preparar una comunicación conjunta para el tercer ciclo del EPU de Australia.
8. El Gobierno australiano recabó la participación de la Comisión de Derechos Humanos de Australia y la sociedad civil para la formulación de la respuesta del Gobierno a las recomendaciones del segundo ciclo del EPU, y seguirá aplicando este enfoque colaborativo a las recomendaciones de mejora que reciba en el tercer ciclo de examen¹.

III. Marcos de derechos humanos de Australia

A. Marcos nacionales

9. Australia es una democracia constitucional en la que impera el estado de derecho que cuenta con mecanismos arraigados para la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos se protegen y promueven por medio de la Constitución, la legislación y las instituciones australianas, así como mediante el *common law*. La Constitución australiana y el *common law* son los mecanismos básicos para la protección de los derechos fundamentales de los australianos, si bien ninguno de los dos trata de establecer un listado codificado de esos derechos².

10. La Constitución de Australia establece un sistema democrático de gobierno representativo y responsable. Nuestro sistema federal protege los derechos mediante la división del poder entre el Gobierno de Australia y los Gobiernos de los seis estados y los dos territorios internos autónomos, cada uno de los cuales tiene la responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales³. Un amplio abanico de instituciones y salvaguardias —en particular, las elecciones democráticas, la estricta separación de poderes entre los tres estamentos de gobierno a nivel federal y la independencia del poder judicial— protegen contra el uso arbitrario del poder gubernamental y promueven un debate público sólido sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos.

11. Las elecciones son libres y justas y el voto es obligatorio, de modo que los miembros del Parlamento deben rendir cuentas ante la población en lo que respecta a los derechos humanos y otros resultados de las políticas públicas por medio del proceso electoral. Durante el proceso de aprobación de legislación, esta se somete a un riguroso debate y examen parlamentario que garantiza un análisis minucioso de las repercusiones de las leyes propuestas en los derechos humanos.

12. Todas las jurisdicciones de Australia cuentan con legislación integral de lucha contra la discriminación para hacer efectivos los derechos a la no discriminación y la igualdad y prohibir que se tomen medidas perjudiciales contra una persona por presentar determinados atributos⁴. El proyecto de ley sobre la discriminación religiosa (que se expone más adelante) demuestra la constante determinación del Gobierno por mejorar los mecanismos de protección existentes en el marco federal de lucha contra la discriminación. Además de los mecanismos constitucionales y parlamentarios de protección de los derechos humanos señalados anteriormente, cada jurisdicción de Australia cuenta con un órgano dedicado a la promoción de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. La Comisión de Derechos Humanos de Australia es un órgano oficial independiente acreditado como la institución nacional de derechos humanos de categoría “A” de Australia, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

13. El Mecanismo Nacional Permanente de Derechos Humanos se creó en 2016 con el objetivo de mejorar la coordinación entre los Gobiernos a nivel federal, estatal y territorial a la hora de presentar informes y colaborar con las Naciones Unidas en relación con cuestiones de derechos humanos⁵. El mecanismo también comprende un proceso de consultas con la Comisión de Derechos Humanos de Australia; un foro anual de ONG sobre derechos humanos, organizado por el Departamento del Fiscal General⁶; y materiales de acceso público sobre los informes presentados por Australia a las Naciones Unidas, incluido un sitio web en el que se hace un seguimiento de los progresos realizados por el país en la aplicación de las recomendaciones de los EPU⁷.

B. Marcos internacionales

14. Australia es desde hace mucho tiempo una defensora activa, colaborativa y práctica de los derechos humanos en el escenario internacional. En la legislación del país se plasman sus obligaciones dimanantes de los siete tratados fundamentales en los que es parte, conforme a la Constitución australiana y el sistema federal de gobierno. Esto garantiza que el nivel de gobierno mejor capacitado para ello sea el que ejecute con la mayor eficacia las obligaciones

pertinentes en beneficio de la población, de un modo que satisfaga las necesidades de las personas en todo el territorio australiano. Los gobiernos australianos llevan a cabo una amplia gama de programas y servicios que dan efectividad a las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos, entre los que se encuentran numerosos planes y estrategias nacionales para proteger los derechos de todos los australianos y dar respuesta a desafíos concretos.

15. En 2017, el Gobierno de Australia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes⁸, lo que refleja la determinación constante del país por prevenir la tortura y los malos tratos.

16. Australia revisa periódicamente sus reservas a los instrumentos internacionales. En 2018, retiró su reserva a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer concerniente a la exclusión de las mujeres de las labores de combate⁹.

17. Desde el segundo ciclo del EPU, Australia ha presentado informes a siete órganos creados en virtud de tratados y comparecido ante seis¹⁰. Ha recibido visitas de cinco titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas¹¹, y facilitará la realización de más visitas cuando estas puedan producirse. Australia mantiene una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas que deseen visitar el país y estudia atentamente sus recomendaciones¹². El Gobierno de Australia se ha comprometido a responder, de buena fe, a todas las comunicaciones recibidas¹³.

IV. Aplicación de las recomendaciones y los compromisos voluntarios

A. Derechos civiles y políticos

Libertad de expresión y libertad de religión o de creencias

18. El Gobierno de Australia se centra en proteger los derechos civiles y políticos de todas las personas de su territorio. El Tribunal Supremo ha interpretado que la Constitución de Australia incluye una protección fundamental de la libertad de comunicación política. Otros derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión en un sentido más general, están protegidos por la presunción general del *common law* de que, en ausencia de legislación clara e inequívoca en sentido contrario (que estaría sometida a los procesos de examen de los derechos humanos descritos anteriormente), la intención de los parlamentos no es interferir con los derechos y libertades fundamentales. Todos los australianos son libres de expresar su parecer en el marco del derecho australiano, lo que incluye la expresión de ideas y opiniones controvertidas o heterodoxas.

19. En Australia conviven una gran diversidad de fes. Todos los ciudadanos son libres de elegir su religión o creencias, de no profesar ninguna religión o creencia y de expresar y practicar su religión y sus creencias sin injerencias ni intimidación, siempre y cuando esas prácticas se ajusten a la legislación del país¹⁴. A fin de examinar si la legislación australiana protege adecuadamente el derecho a la libertad de religión, el Gobierno ha designado un panel de expertos, que presentó su informe en mayo de 2018. En el examen se determinó que los australianos gozaban de un alto grado de libertad religiosa, pero se detectaron algunas oportunidades para reforzar la protección. El Gobierno ha celebrado amplias consultas sobre un conjunto de leyes en materia de libertad religiosa, entre las que se encuentra un proyecto de ley sobre la discriminación religiosa¹⁵.

20. Australia ha propugnado en el plano internacional la protección de los periodistas, los defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión¹⁶. A nivel nacional, el Gobierno considera que la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia australiana. En virtud de la legislación del país, la libertad de publicación siempre ha estado sujeta a algunos límites, por ejemplo en relación con el desacato a los tribunales, la privacidad o la difamación, así como con cuestiones de seguridad nacional y justicia penal.

Recientemente, la adecuada conciliación de estos factores ha sido objeto de debate público en Australia. En agosto de 2020, la Comisión Parlamentaria Mixta de Inteligencia y Seguridad publicó su informe sobre los efectos que tiene sobre la libertad de prensa el ejercicio de las facultades de las fuerzas del orden y los organismos de inteligencia. Actualmente, el Gobierno está examinando las recomendaciones.

21. Es importante señalar que el Director de la Fiscalía Pública del Commonwealth (la Fiscalía del Commonwealth de Australia) y la Policía Federal Australiana funcionan con independencia del Gobierno. De conformidad con la Política Federal de Enjuiciamiento, cuando el Director de la Fiscalía Pública del Commonwealth decida enjuiciar un delito, esta decisión debe redundar en el interés público y no verse influida por un eventual beneficio o perjuicio político para el Gobierno.

22. De acuerdo con las modificaciones introducidas recientemente, es necesario obtener el consentimiento del Fiscal General antes de enjuiciar a un periodista por determinados delitos. El requisito de consentimiento no otorga al Fiscal General la facultad para ordenar al Director de la Fiscalía Pública del Commonwealth que inicie un proceso judicial. La obligación de recabar el consentimiento del Fiscal General solo se aplica si el Director de la Fiscalía Pública del Commonwealth estima por su propia cuenta que ha de procederse al enjuiciamiento. Es entonces cuando se necesita el consentimiento del Fiscal General como salvaguardia complementaria.

23. El requisito de obtener el consentimiento del Fiscal General para poder iniciar determinadas categorías de procesos judiciales forma parte del sistema australiano desde hace tiempo, y se aplica a una serie de circunstancias diferentes.

Multiculturalismo, diversidad e inclusión¹⁷

24. Australia es una sociedad multicultural próspera y orgullosa y sus gobiernos son conscientes de los enormes beneficios que el multiculturalismo ha aportado al país. El censo de 2016 reveló que los australianos provienen de casi 200 países, hablan más de 300 lenguas y practican más de 100 religiones. Casi la mitad (49 %) de los australianos han nacido en el extranjero o tienen al menos un progenitor nacido en el extranjero.

25. La declaración multicultural de Australia (2017), titulada “Australia Multicultural: unida, fuerte y exitosa”, renueva y reafirma el compromiso del Gobierno con una Australia multicultural y reconoce la diversidad cultural como una de nuestras mayores virtudes. Asimismo, reafirma que el racismo y la discriminación no tienen cabida en Australia.

26. Cada mes de marzo, Australia celebra la Semana de la Armonía, que coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Estas celebraciones fomentan la inclusividad, el respeto de la diversidad cultural y el sentimiento de pertenencia de todas las personas.

27. En marzo de 2019, el Gobierno anunció un paquete de medidas de cohesión social dotado de 71 millones de dólares para la inversión en programas que celebren la diversidad multicultural de Australia y ayuden a que todas las comunidades participen activamente en el desarrollo económico y social del país y se beneficien de él.

28. La prosperidad de la sociedad multicultural de Australia está ligada a la observancia por parte del país de los derechos de igualdad ante la ley y no discriminación y de los derechos de las minorías a disfrutar de su cultura, practicar su religión y emplear su idioma. Todas las jurisdicciones australianas cuentan con leyes que prohíben la discriminación por una serie de motivos relacionados con la raza, el color y el origen nacional y étnico, y la legislación federal y las leyes de determinados estados y territorios tipifican como delito la incitación a la violencia contra un grupo por esos motivos.

Violencia familiar, doméstica y sexual¹⁸

29. Pese a los esfuerzos del país por combatir la violencia familiar, doméstica y sexual, el Gobierno australiano considera que su incidencia sigue siendo inaceptablemente elevada. Según una encuesta, aproximadamente 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 12 hombres han sido objeto de violencia física o sexual a manos de su pareja desde los 15 años¹⁹. Por otro lado, 1 de cada 6 mujeres y 1 de cada 9 hombres sufrieron algún acto de violencia y maltrato físico

o abusos sexuales antes de cumplir los 15 años, lo que indica que este fenómeno afecta a los niños en grado considerable.

30. Algunos grupos son más vulnerables a la violencia familiar, doméstica y sexual y es posible que sufran sus efectos con mayor fuerza o tengan menos opciones de apoyo. En 2016-2017, las mujeres indígenas mayores de 15 años tenían 34 veces más probabilidades que las mujeres no indígenas de ser hospitalizadas como consecuencia de la violencia familiar²⁰. En comparación con las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad presentaban 1,8 veces más probabilidades de haber sido objeto de violencia física o sexual a manos de su pareja en el año anterior²¹. Las mujeres lesbianas y bisexuales también sufren más maltrato físico y psicológico y más abusos sexuales que las mujeres exclusivamente heterosexuales²².

31. El Plan de Acción Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos 2010-2022 (Plan Nacional) establece un marco de acción para que todos los gobiernos de Australia adopten medidas encaminadas a reducir la violencia familiar, doméstica y sexual. Los sucesivos gobiernos han realizado importantes inversiones en el marco del Plan Nacional, entre otras cosas para la financiación de los servicios de primera línea, las actividades de prevención, los programas de modificación de la conducta, los servicios de alojamiento seguro, la línea telefónica nacional gratuita 1800RESPECT y un servicio de asistencia en línea para prestar apoyo a las víctimas de la violencia familiar, doméstica y sexual y recopilar datos al respecto²³.

32. El cuarto Plan de Acción para 2019-2022 del Plan Nacional considera que, para interrumpir el ciclo de la violencia, la prevención primaria resulta esencial. También considera que la violencia familiar, doméstica y sexual afecta desproporcionadamente a determinados grupos de mujeres y niños y destaca la necesidad de adaptar las iniciativas a las diversas experiencias vitales.

33. A fin de prestar apoyo a las mujeres y niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres, el Gobierno australiano aporta financiación para lo siguiente: los Servicios Jurídicos de Prevención de la Violencia en la Familia; actividades que alientan a los hombres a ser modelos positivos de conducta; actividades de prevención dirigidas por las comunidades; y servicios holísticos e intensivos de coordinación asistencial, apoyo y asesoramiento dirigidos a las familias.

34. En marzo de 2020, el Consejo de Gobiernos Australianos creó el Consejo para la Seguridad de la Mujer con el fin de coordinar la labor de las jurisdicciones en lo que se refiere a la aplicación del Cuarto Plan de Acción e iniciar la formulación del siguiente Plan Nacional. Un nuevo Equipo de Tareas para la Seguridad de la Mujer proseguirá esta labor cuando el Consejo de Gobiernos Australianos cese en sus funciones como parte de las reformas recientes. El siguiente Plan Nacional dará respuesta a los cambios en el entorno causados por la COVID-19, a los resultados de una investigación parlamentaria sobre la violencia familiar, doméstica y sexual y a las evaluaciones e investigaciones financiadas en el marco del Cuarto Plan de Acción.

35. En 2017, todas las jurisdicciones estatales y territoriales de Australia aprobaron leyes destinadas a crear una estrategia nacional para el reconocimiento de las órdenes de alejamiento dictadas en casos de violencia doméstica y familiar y el intercambio de información al respecto en el marco del Sistema Nacional de Órdenes de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. El sistema contribuye a asegurar que la legislación proteja a las personas que corran riesgo de sufrir violencia independientemente del lugar de Australia en que se encuentren.

36. El Gobierno de Australia ha concertado una nueva Alianza Nacional de Asistencia Jurídica con los estados y territorios, que entró en vigor en julio de 2020. En un período de cinco años, se proporcionarán más de 2.000 millones de dólares a las comisiones de asistencia jurídica, los centros jurídicos comunitarios y los Servicios Jurídicos para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres. De estos, 145,97 millones de dólares se asignarán en un período de cinco años a los servicios de asistencia jurídica de primera línea especializados en derecho de familia y violencia familiar.

37. En marzo de 2020, el Gobierno de Australia anunció un paquete de medidas de apoyo a la lucha contra la violencia doméstica, dotado de 150 millones de dólares, con el fin de garantizar que las mujeres y los niños pudieran seguir accediendo a medios de apoyo durante la pandemia de COVID-19.

38. En 2015, el Gobierno de Australia creó el primer organismo público del mundo dedicado a la seguridad en línea: el Comisionado de Seguridad Electrónica. En 2016 se puso en marcha la iniciativa “eSafetyWomen”, que tiene como objetivo empoderar a las mujeres para protegerse de los riesgos y agresiones derivados de la tecnología, e imparte formación al sector que se ocupa de combatir la violencia familiar, doméstica y sexual. A través de un proceso de diseño colaborativo, el Comisionado de Seguridad Electrónica ha trabajado con las comunidades en situación de riesgo para el desarrollo de recursos, incluidas iniciativas centradas en las mujeres aborígenes e isleñas del estrecho de Torres, las mujeres con discapacidad y las mujeres procedentes de entornos cultural y lingüísticamente diversos.

39. En junio de 2018, en el contexto del creciente reconocimiento mundial de la prevalencia del acoso sexual en el lugar de trabajo y del daño que causa, la entonces Ministra de Asuntos de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos de Australia anunciaron el lanzamiento de la Investigación Nacional sobre el Acoso Sexual en los Lugares de Trabajo Australianos, el primer estudio de ese tipo en el mundo. El informe se presentó en el Parlamento el 5 de marzo de 2020. En él se analizan la naturaleza, la prevalencia y los factores que propician el acoso sexual en los lugares de trabajo australianos y las medidas necesarias para mejorar la prevención y la respuesta. El Gobierno está estudiando el informe y las recomendaciones.

Aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y mecanismo nacional de prevención²⁴

40. Al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2017, Australia formuló una declaración para aplazar por un período de hasta tres años las obligaciones relacionadas con el mecanismo nacional de prevención. El mecanismo nacional de prevención consistirá en una red de cooperación entre los órganos de supervisión a nivel federal, estatal y territorial que estará facilitada por el coordinador del mecanismo, esto es, por la Oficina del Ombudsman del Commonwealth.

41. En 2019, la Oficina del Ombudsman del Commonwealth informó sobre el nivel de preparación de Australia para aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se cotejó la información proporcionada por 55 órganos de supervisión que se autoevaluaron tomando como referencia las principales características que deben tener los órganos que integren el mecanismo nacional de prevención a fin de ofrecer un resumen de la capacidad existente, las posibles lagunas o solapamientos y los ámbitos susceptibles de mejora. En junio de 2020, el Comisionado de Derechos Humanos publicó su informe final, titulado *Implementing OPCAT in Australia* (aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en Australia). En el informe se formulan 17 recomendaciones, fruto de las consultas con la sociedad civil, sobre la manera en que se debería aplicar el Protocolo Facultativo en Australia.

42. En agosto de 2020, el Gobierno federal y Australia Occidental habían designado sus respectivos órganos de inspección para el mecanismo nacional de prevención.

43. Como consecuencia de la propagación de la COVID-19, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas ha pospuesto su visita a Australia. Australia facilitará la visita del Subcomité cuando pueda producirse.

Lucha contra el terrorismo²⁵

44. Una de las principales funciones del Gobierno consiste en proteger a la población y los intereses de Australia frente a las amenazas del terrorismo y el extremismo violento, con lo que también se protegen los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida. La estrategia y los programas del Gobierno de lucha contra el extremismo violento

hacen frente a los factores que propician todas las formas de extremismo violento y se aplican con independencia de si la motivación es religiosa, ideológica o política.

45. El Parlamento australiano ha aprobado 19 instrumentos legislativos sobre seguridad nacional desde 2014. El marco legislativo de Australia prevé límites y salvaguardias para asegurar que las autoridades ejerzan sus competencias de manera proporcional y con fines específicos, entre otras cosas por medio de exámenes independientes.

46. Los órganos de supervisión también examinan las actividades de los organismos públicos. Por ejemplo, el Inspector General de Inteligencia y Seguridad supervisa los organismos de inteligencia de Australia, velando por que actúen conforme a la ley, con propiedad y respetando los derechos humanos.

47. Cuando lo estima necesario, el Gobierno australiano encarga exámenes independientes de la Comunidad Nacional de Inteligencia, que está integrada por organismos de inteligencia y opera en todo el Gobierno. Desde 2018-2019, en el marco del Examen Integral del Régimen Jurídico de la Comunidad Nacional de Inteligencia, se han analizado una serie de cuestiones, incluidas la rendición de cuentas y la supervisión de los organismos que conforman dicha comunidad. En diciembre de 2019 se presentó al Gobierno australiano un informe confidencial sobre el examen, y en un futuro próximo se ofrecerá una versión no confidencial.

Trata de personas, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud²⁶

48. Australia cuenta con un amplio marco legislativo que tipifica como delito la trata de personas, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, lo que incluye la servidumbre, el trabajo forzoso, la contratación engañosa con fines de trabajo o servicios en cualquier sector y la explotación dentro de las relaciones íntimas. La respuesta nacional de Australia a las formas contemporáneas de esclavitud refleja las obligaciones que le incumben en virtud de los instrumentos internacionales en los que es parte y las normas internacionales en materia laboral. En la actualidad, el Gobierno de Australia está avanzando en el proceso de ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930.

49. En virtud de la Ley sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud de 2018, se estableció el requisito de presentar informes sobre las formas contemporáneas de esclavitud, que obliga a las entidades del mercado australiano con unos ingresos anuales totales superiores a 100 millones de dólares a informar cada año sobre las actividades que lleven a cabo para hacer frente a los riesgos de esclavitud contemporánea en sus cadenas de suministro y operaciones mundiales. Australia se ha convertido en el primer país del mundo en obligar al Gobierno a publicar declaraciones anuales, y actualmente está preparando la relativa al período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, en la que detalla sus esfuerzos por combatir los riesgos de esclavitud contemporánea en los procesos de contratación e inversión públicas.

50. En el marco del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y la Esclavitud 2015-2019, el Gobierno de Australia mantuvo equipos especializados dentro de la Policía Federal Australiana para investigar la trata de personas y la esclavitud, proporcionó financiación a las organizaciones de lucha contra la esclavitud, impartió formación a los funcionarios que trabajan en primera línea, avanzó en la reforma legislativa en relación con los delitos de matrimonio forzado y reforzó las medidas de protección de testigos vulnerables. Se ha emprendido un amplio proceso de consulta pública para orientar la elaboración del siguiente plan de acción nacional quinquenal (2021-2025) de Australia de lucha contra las formas contemporáneas de esclavitud.

51. Desde su puesta en marcha en 2004, se ha derivado a más de 500 víctimas de la trata de personas y la esclavitud al Programa de Apoyo a las Víctimas de la Trata. El programa comprende servicios de coordinación asistencial especializada, alojamiento, tratamiento médico, asesoramiento, apoyo social y remisión a servicios de orientación legal y en materia de migración. En febrero de 2018, el Gobierno de Australia anunció medidas de apoyo adicionales para las víctimas del matrimonio forzado.

52. Australia desempeña una función de liderazgo mundial y colabora con otros países de nuestra región y de otras partes del mundo para combatir la trata de personas y la esclavitud.

Australia copreside, junto con Indonesia, el Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos, y el 1 de agosto de 2019 puso en marcha, junto con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, la iniciativa de lucha contra la trata²⁷. Australia también fue uno de los fundadores de la Comisión del Sector Financiero sobre la Esclavitud Contemporánea y la Trata de Personas, que desarrolló su actividad en 2018-2019.

53. En 2016, el Gobierno de Australia creó el Equipo de Tareas sobre los Trabajadores Migrantes, que seleccionó propuestas para hacer frente de manera más efectiva a la explotación de los trabajadores migrantes. El informe final se publicó en marzo de 2019. El Gobierno de Australia ha aceptado, en principio, las 22 recomendaciones formuladas y creado un Grupo Interinstitucional sobre los Trabajadores Migrantes para supervisar su aplicación en todo el Gobierno. Se siguen realizando importantes progresos, entre los que se encuentran el compromiso del Gobierno de establecer sanciones penales para las formas más graves de explotación en el lugar de trabajo y el fortalecimiento de las iniciativas de educación e información dirigidas a los trabajadores migrantes y los estudiantes internacionales.

B. Derechos de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres²⁸

54. Australia se enorgullece de albergar la cultura continua más antigua de la Tierra y manifiesta su respaldo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues comparte el compromiso que en ella subyace de colaborar con los australianos indígenas para reportar mejoras reales y duraderas a los pueblos indígenas y sus comunidades²⁹. Desde 2015, se han registrado mejoras en lo que se refiere a la salud, la educación, el registro de los nacimientos y los derechos al patrimonio cultural y en la participación de los indígenas en cuestiones que les conciernen. No obstante, siguen existiendo dificultades en relación con el logro de la igualdad en materia de salud, esperanza de vida y nivel educativo y la reducción del contacto con el sistema de justicia y de los casos de separación de niños de sus familias.

Voz de los indígenas, reconocimiento constitucional, procesos de tratados y narración de la verdad³⁰

55. Al igual que todos los demás australianos adultos, los australianos indígenas pueden participar plenamente en los procesos democráticos del país (y, en consecuencia, en la protección de los derechos humanos de los australianos) votando en las elecciones y presentándose como candidatos a cargos electivos. El Ministro de los Australianos Indígenas (un cargo del Gobierno) es el Excmo. Sr. Ken Wyatt (diputado), un australiano indígena. En 2010, se convirtió en el primer australiano indígena en ser elegido para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Australia.

56. Durante una serie de diálogos de las Primeras Naciones relativos al reconocimiento constitucional, organizados por el Consejo para el Referéndum en 2017 y en los que participaron más de 1.200 delegados de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, se señaló como prioridad la necesidad de contar con una voz más fuerte en los procesos de legislación y toma de decisiones. Estos diálogos culminaron con la Declaración de Uluru desde el Corazón, formulada por 250 representantes indígenas procedentes de toda Australia, en la que también se señalaron como prioridades clave la suscripción de tratados entre los gobiernos y los australianos indígenas y la narración de la verdad sobre el pasado. El Gobierno de Australia está determinado a emprender un proceso de formulación conjunta para articular los detalles de una “voz” indígena. La primera fase de este proceso ya está en marcha, con grupos centrados en desarrollar los elementos locales, regionales y nacionales de esa “voz”³¹.

57. Las actividades del Consejo para el Referéndum se enmarcan en la considerable labor llevada a cabo para formular propuestas relativas al reconocimiento constitucional desde la creación, por el Gobierno de Australia, del Panel de Expertos para el Reconocimiento Constitucional (2012) y del Comité Especial Conjunto sobre el Reconocimiento

Constitucional de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (2015). El Gobierno de Australia sigue determinado a reconocer a los australianos indígenas en la Constitución, y celebrará un referéndum si finalmente se alcanza un consenso y la propuesta tiene claros visos de prosperar.

Cerrar la Brecha³²

58. Desde 2007, el marco y las metas del plan Cerrar la Brecha han orientado y coordinado las iniciativas nacionales para reducir la disparidad entre los australianos indígenas y no indígenas en lo que se refiere a los resultados económicos, de salud y de educación. El informe más reciente sobre el plan Cerrar la Brecha (2020) reveló que Australia solo va camino de alcanzar dos de las siete metas fijadas en 2008.

59. En 2018, el 86,4 % de los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres de cuatro años estaban matriculados en la educación preescolar, lo que significa que el país va camino de cumplir la meta del 95 % para 2025. La meta de reducir a la mitad, a más tardar en 2020, la brecha entre los australianos indígenas y no indígenas que han superado el 12º curso o un nivel equivalente también progresa según lo previsto. Las metas de cerrar la brecha en materia de asistencia escolar y reducir a la mitad la disparidad en lo que se refiere a la lectura, las nociones elementales de aritmética y el empleo a más tardar en 2018 no se han cumplido, si bien la brecha se ha reducido en todos los niveles educativos y se han registrado mejoras en el ámbito de la lectura y la aritmética elemental. Se han realizado progresos en lo que respecta a la meta de reducir a la mitad la disparidad existente en las tasas de mortalidad infantil para 2018, pero no los suficientes para cumplirla. La tasa nacional de empleo entre los indígenas se ha mantenido estable, mientras que la meta era reducir a la mitad la brecha a más tardar en 2018. La meta de cerrar la brecha en lo que respecta a la esperanza de vida para 2031 no progresa al ritmo necesario.

60. El Gobierno de Australia ha reconocido la necesidad de hacer más al respecto. En 2018, los Gobiernos australianos acordaron establecer una alianza formal con los aborígenes e isleños del estrecho de Torres a fin de actualizar el plan Cerrar la Brecha.

61. En marzo de 2019, se formalizó la alianza histórica sobre el plan Cerrar la Brecha 2019-2029, formada por todos los gobiernos australianos, la Coalición de Organizaciones Sectoriales de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (Coalición de Organizaciones Sectoriales) y la Asociación de Gobiernos Locales de Australia. La alianza cuenta con un Consejo Conjunto sobre el Plan Cerrar la Brecha, integrado por 12 representantes de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, nombrados por la Coalición de Organizaciones Sectoriales, y representantes ministeriales de los gobiernos australianos. La alianza considera esencial que los aborígenes e isleños del estrecho de Torres, por conducto de las organizaciones que los representan, participen en los procesos de toma de decisiones respecto del diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación del Acuerdo Nacional sobre el Plan Cerrar la Brecha a fin de mejorar sus condiciones de vida³³.

62. El nuevo Acuerdo Nacional entró en vigor el 27 de julio de 2020. Se sustenta sobre cuatro reformas prioritarias destinadas a cambiar la manera en que los Gobiernos australianos trabajan con los australianos indígenas y se basa en 16 metas socioeconómicas para mejorar los resultados en materia de educación, empleo, salud y bienestar, justicia, seguridad, vivienda, tierras y aguas e idiomas. Las reformas prioritarias protegerán las culturas de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres y contribuirán a su fortalecimiento a través de las siguientes medidas: el establecimiento de alianzas formales y procesos de toma compartida de decisiones; el desarrollo del sector controlado por la comunidad para que preste servicios destinados a cerrar la brecha; la transformación sistémica y estructural de las organizaciones gubernamentales convencionales a fin de aumentar la rendición de cuentas y responder a las necesidades; y el acceso compartido a los datos y la información a nivel regional. Durante el próximo año, se formularán otras cuatro metas relativas a la violencia familiar, el acceso a la información, las infraestructuras comunitarias y las aguas interiores.

Mejora de los resultados de los australianos indígenas en materia de educación y salud³⁴

63. Se han adoptado varias medidas para mejorar los resultados educativos de los australianos indígenas. En 2014, el Gobierno de Australia introdujo un plan para la financiación de las escuelas en función de las necesidades, que contempla la asignación de fondos adicionales a los centros con alumnos aborígenes e isleños del estrecho de Torres. En el marco del Programa de Escolarización Infantil de la Estrategia para el Adelanto de los Indígenas, también se proporciona financiación específica para mejorar las tasas de asistencia escolar y los resultados educativos desde la primera infancia hasta la educación terciaria³⁵. En 2020, el nuevo Paquete de Medidas para la Educación de los Jóvenes Indígenas financiará becas de enseñanza secundaria, proyectos de mentoría y centros residenciales e internados para más de 20.000 estudiantes. El programa “Connected Beginnings” del Gobierno de Australia también integra servicios de la primera infancia, salud materno-infantil y apoyo a la familia en las escuelas situadas en algunas comunidades aborígenes e isleños del estrecho de Torres a fin de preparar mejor a los niños para su escolarización³⁶.

64. El Plan para la Aplicación del Plan Nacional de Salud para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres 2013-2023, que orienta las políticas y programas destinados a mejorar la salud, incorpora objetivos relativos a 20 indicadores que han de cumplirse a más tardar en 2023. De acuerdo con información actualizada de julio de 2019, 12 de esos objetivos avanzan correctamente, 6 no progresan al ritmo necesario y 2 no pueden evaluarse en estos momentos. Los objetivos relativos a la atención prenatal, el tabaquismo y la vacunación de niños de entre uno y cinco años van camino de cumplirse. Pese a que la proporción de aborígenes e isleños del estrecho de Torres que se someten a un reconocimiento médico anual sigue en aumento, los objetivos establecidos para determinados grupos de edad no siguen la trayectoria necesaria para su cumplimiento. Se ha creado un conjunto de materiales de comunicación para informar acerca de los reconocimientos médicos que existen³⁷.

65. El Gobierno de Australia financia una red nacional formada por unos 140 servicios de salud controlados por la comunidad aborígen y por aproximadamente otros 40 prestadores de servicios médicos a fin de proporcionar atención primaria de la salud gratuita, integral y culturalmente apropiada a los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres.

66. Para las personas que viven en zonas rurales y remotas, el Gobierno está ampliando el acceso a consultas con médicos generalistas y especialistas por videoconferencia o teléfono. La oferta de servicios de telemedicina ha aumentado durante la pandemia de COVID-19. Los estados y territorios también ayudan a los pacientes que viven en zonas aisladas a sufragar los gastos de viaje y alojamiento para acudir a un especialista médico³⁸.

67. La prevención de los problemas de salud mental y del suicidio es una prioridad nacional, en particular por lo que respecta a los australianos indígenas, cuyas tasas de suicidio son casi el doble de altas que entre los australianos no indígenas. El suicidio es la principal causa de muerte de niños y jóvenes, tanto indígenas como no indígenas. El Quinto Plan Nacional de Salud Mental y Prevención del Suicidio (2017-2022) incluye entre sus principales prioridades a los australianos indígenas. El Gobierno de Australia cuenta con estrategias de salud mental específicas para los indígenas y financia programas de prevención del suicidio, entre los que se encuentran:

a) El Centro de Mejores Prácticas para la Prevención del Suicidio entre los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, que cuenta con un grupo asesor formado por australianos indígenas;

b) Gayaa Dhuwi (Proud Spirit) Australia, para la elaboración de una versión revisada de la Estrategia Nacional para la Prevención del Suicidio entre los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres a fin de prestar una asistencia culturalmente apropiada;

c) Doce centros de ensayos para la prevención del suicidio, dos de los cuales (en Darwin y Kimberley) están dirigidos específicamente a los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres; y

d) El establecimiento de un Centro de Intercambio de Información sobre los Indígenas en materia de Salud Mental y Prevención del Suicidio a fin de mejorar la base empírica.

Reducción del encarcelamiento de aborígenes e isleños del estrecho de Torres³⁹

68. Los aborígenes e isleños del estrecho de Torres forman el 28 % de la población penitenciaria de Australia, pese a representar el 3,3 % de la población en general⁴⁰. Las mujeres indígenas representan el 33 % del total de mujeres recluidas⁴¹. Recientemente se han realizado estudios con los que se ha tratado de encontrar estrategias para dar respuesta a esta sobrerrepresentación.

69. Los Gobiernos estatales y territoriales, de los que dependen los sistemas de justicia, han comenzado a adoptar medidas para reducir el encarcelamiento de indígenas. Por ejemplo, sobre la base de la labor realizada por anteriores alianzas, el Territorio de la Capital de Australia suscribió un acuerdo formal (2019-2028) con la comunidad de aborígenes e isleños del estrecho de Torres residentes en el territorio a fin de reducir los índices de encarcelamiento mediante la adopción de un enfoque centrado en la conexión con la comunidad, el aprendizaje a lo largo de la vida, la participación económica, la salud y el bienestar y la vivienda.

70. El Territorio del Norte está preparando su primer Acuerdo de Justicia para los Pueblos Aborígenes, en colaboración con los aborígenes del territorio, a partir de datos, investigaciones y amplias consultas en las que también participaron niños y jóvenes aborígenes y sus familias. El territorio ha prometido financiación para probar modelos sustitutivos de la privación de libertad en dos centros residenciales situados en los territorios aborígenes y operados por la comunidad que ofrecen servicios de rehabilitación a medida.

71. Australia Occidental ha emprendido varias iniciativas para reducir los índices de encarcelamiento de aborígenes, entre las que se encuentran la mejora del acceso a los sistemas de fianza y rehabilitación, el aumento de la flexibilidad para las penas no privativas de la libertad, el procesamiento de los pequeños infractores al margen del sistema de justicia, el fortalecimiento de la supervisión y el apoyo prestado tras la puesta en libertad y el aumento de la formación y la rendición de cuentas de la policía.

Muertes de aborígenes detenidos

72. En octubre de 2018, el Gobierno de Australia encargó un examen independiente del estado de aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión Real de Encuesta sobre las Muertes de Aborígenes Detenidos (1991). El examen reveló que, de las 339 recomendaciones, el 78 % se habían aplicado en gran parte o plenamente y el 16 %, de manera parcial, mientras que el 6 % restante no se habían aplicado. Muchos aspectos de las recomendaciones no aplicadas o aplicadas de manera parcial quedaron obsoletos gracias a medidas y políticas gubernamentales posteriores. Las recomendaciones que no se han aplicado plenamente tienen que ver con cuestiones relacionadas con la intensidad de la presentación de informes sobre los progresos realizados en materia de aplicación y con la presentación de datos sobre las muertes de personas detenidas por la policía.

73. Una recomendación clave se refería a la creación de servicios de notificación de la detención, que obligan a la policía a ponerse en contacto con los Servicios Jurídicos para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres o su equivalente inmediatamente después de detener a una persona aborígen o isleña del estrecho de Torres. En 2016, el Gobierno de Australia se ofreció a financiar, durante un período de tres años, los servicios de notificación de la detención establecidos por ley en cada estado y territorio. A día de hoy, Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital de Australia, el Territorio del Norte y Australia Occidental cuentan con servicios de notificación de la detención financiados por el Gobierno federal, y en breve se crearán servicios de este tipo en Victoria y Australia Meridional.

Apoyo a las personas que viven en los territorios indígenas⁴²

74. Los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres llevan milenios cuidando de la tierra y el agua. La Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes de 1993 protege y establece procesos para el reconocimiento de los derechos territoriales preexistentes de los indígenas. En virtud de esta ley federal, se ha determinado que los títulos de los indígenas abarcan el 39,9 % de todo el territorio australiano, y un 13,6 % de esas tierras son de uso exclusivo indígena⁴³. Actualmente, en virtud de los regímenes de nivel federal, estatal y territorial, se reconoce el interés de los indígenas sobre el 51,5 % del territorio australiano.

Los propietarios tradicionales están buscando maneras de utilizar los intereses territoriales de los que gozan en virtud de sus títulos con fines sociales, culturales o económicos. En octubre de 2019, el Gobierno de Australia presentó al Parlamento el proyecto de ley de reforma de la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes. Si se aprueba, este proyecto de ley modificará la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes de 1993 de modo que ofrezca mejor respaldo a la suscripción de acuerdos en relación con los títulos de los indígenas y a la gestión sostenible de las tierras sujetas a esos títulos tras su determinación, e introducirá mejoras prácticas para que el sistema de títulos de los indígenas siga siendo efectivo.

75. El Gobierno de Australia invierte en las comunidades remotas y en ayudar a las personas para que vivan en los territorios indígenas, y para ello cuenta con la Estrategia para el Adelanto de los Indígenas y con programas que aumentan la participación en la educación, la formación y la economía de mercado; reducen la dependencia de las ayudas sociales; promueven la participación social; y reconocen las conexiones culturales de los australianos indígenas con su tierra. A raíz de una auditoría de los resultados de la Estrategia para el Adelanto de los Indígenas llevada a cabo en 2017, el Gobierno de Australia creó un Marco de Evaluación de la Estrategia a fin de garantizar unas evaluaciones de alta calidad, éticas e inclusivas que orientasen la formulación de políticas eficaces y la toma de decisiones.

76. Otras iniciativas clave son, entre otras, el Programa de Guardabosques Indígenas y las Zonas Indígenas Protegidas. El Programa de Guardabosques Indígenas comenzó en 2007 en la forma de un acuerdo entre el Gobierno de Australia y los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres para trabajar en los territorios indígenas. Actualmente, genera empleo, vías de formación y perspectivas profesionales para los australianos indígenas en el ámbito de la gestión de las tierras y el mar. En el marco del programa se financian más de 2.900 puestos a jornada completa y parcial y de empleo ocasional dirigidos a australianos indígenas que deseen trabajar en las tierras y el mar de sus territorios.

77. Las Zonas Indígenas Protegidas son extensiones de tierra y mar gestionadas por grupos indígenas por medio de acuerdos voluntarios con el Gobierno de Australia. Se han designado 75 Zonas Indígenas Protegidas que abarcan una superficie de aproximadamente 67 millones de hectáreas, lo que equivale a más del 44 % de los parques, reservas y zonas protegidas oficiales de toda Australia. Actualmente, se están planificando 18 nuevas Zonas Indígenas Protegidas.

78. El Gobierno de Australia reconoce que siguen existiendo dificultades en lo que respecta a la provisión de viviendas para los australianos indígenas que viven en zonas remotas o muy remotas. El hacinamiento grave, que constituye una forma de falta de hogar, es mayor en las regiones remotas. En los últimos 12 años, el Gobierno de Australia ha invertido una cantidad sustancial de recursos en la provisión de vivienda en zonas remotas, y colabora con los Gobiernos estatales y territoriales para satisfacer las necesidades de vivienda de los australianos indígenas.

Registro de nacimientos⁴⁴

79. En reconocimiento de los obstáculos con que tropiezan algunos miembros de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres para registrarse, los estados y los territorios, que son los responsables del registro de nacimientos, están adoptando medidas para ayudar a las familias de australianos indígenas a registrar a sus hijos al nacer.

80. Por ejemplo, el Territorio del Norte permite registrar el nacimiento aun cuando los padres no hayan completado el formulario de registro, lo que se ha traducido en un número relativamente bajo de nacimientos sin registrar. El Gobierno de Australia apoyó el Programa Nacional de Certificados de Nacimiento de Pathfinders, dirigido por indígenas, que financió la expedición gratuita de 7.500 certificados de nacimiento entre 2015 y 2017 en Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria.

81. Son varios los estados que en los últimos años han visto aumentar el porcentaje de nacimientos registrados entre los aborígenes e isleños del estrecho de Torres, entre ellos Nueva Gales del Sur, donde se produjo un incremento del 53 % entre 2017 y 2018.

Mujeres aborígenes e isleñas del estrecho de Torres⁴⁵

82. El Gobierno de Australia colabora con el Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres para poner en marcha el proyecto Wiyi Yani U Thangani (Voces de Mujeres). El Comisionado ha celebrado amplias consultas con mujeres y niñas aborígenes e isleñas del estrecho de Torres para examinar sus necesidades, dificultades y aspiraciones y conocer sus soluciones a problemas como el racismo y el trauma. El informe se publicará próximamente.

Patrimonio cultural⁴⁶

83. Todos los estados y territorios de Australia cuentan con leyes que protegen el patrimonio cultural y arqueológico de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres. Victoria modificó su ley relativa al patrimonio cultural de los aborígenes en 2016 para reconocer la protección de su patrimonio inmaterial, lo que incluye las lenguas, los conocimientos tradicionales y las artes, de conformidad tanto con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Australia Occidental va a aprobar nuevas leyes para sustituir la Ley de Patrimonio Aborigen de 1972 a fin de empoderar a las voces aborígenes, ampliar la definición del patrimonio cultural aborigen, aumentar su protección y adoptar mejores decisiones respecto de su gestión y protección en el estado.

Separación de los niños de sus familias⁴⁷

84. Los Gobiernos australianos están resueltos a corregir la proporción excesiva de niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres en modalidades de acogimiento fuera del hogar cuando ello pueda hacerse en condiciones de seguridad. Entre 2015 y 2019, la tasa de niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres en regímenes de acogimiento fuera del hogar aumentó del 48,1 % al 54,2 %, una proporción casi 11 veces superior a la registrada entre los niños no indígenas⁴⁸.

85. La primera prioridad del Cuarto Plan de Acción 2018-2020 del Marco Nacional para la Protección de los Niños de Australia 2009-2020 (véase la sección C *infra*) es mejorar la situación de los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres que estén en riesgo de entrar en el sistema de protección de la infancia o que ya hayan estado en contacto con él. El Cuarto Plan de Acción tiene el objetivo de aumentar la participación de los australianos indígenas en la toma de decisiones y apoyar la expansión y el desarrollo de las organizaciones controladas por las comunidades aborígenes para que presten servicios de apoyo y de protección infantil. El Gobierno de Australia proporciona financiación al Grupo de Trabajo sobre los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, que transmite sus impresiones, consejos y conocimientos especializados sobre cuestiones relacionadas con el Cuarto Plan de Acción.

86. Un logro clave es la mejora de la aplicación de los cinco elementos del Principio para el Acogimiento de Niños Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (prevención, asociación, acogimiento familiar, participación y conexión), cuyo objetivo es que los niños mantengan el contacto con sus familias, comunidades, culturas y territorios, velando, al mismo tiempo, por que los aborígenes e isleños del estrecho de Torres participen en las decisiones relativas al cuidado y protección de sus hijos.

87. El Plan de Acción Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos y la Estrategia para el Adelanto de los Indígenas también prevén iniciativas para hacer frente a los factores que provocan la separación de los niños de sus familias y mejorar la salud, bienestar y seguridad generales de las comunidades.

C. Derechos del niño⁴⁹

88. Los Gobiernos de los estados y territorios son los encargados de ejecutar muchos de los programas y servicios mediante los cuales se da cumplimiento a las obligaciones asumidas por Australia en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras las relativas a la educación, la salud, la justicia juvenil y la protección de la infancia. Cada

jurisdicción de Australia cuenta con un comisionado o defensor de la infancia facultado para supervisar de manera independiente, promover y proteger los derechos del niño. Australia tiene un Comisionado Nacional para la Infancia desde 2013, y en 2020 se nombró a una nueva persona para ocupar el cargo.

89. El Gobierno de Australia reconoce que siguen existiendo dificultades en lo referente a la protección de los niños contra la violencia, los malos tratos y el descuido y la reducción del porcentaje de niños en modalidades de acogimiento fuera del hogar, especialmente entre los aborígenes e isleños del estrecho de Torres. Los gobiernos están realizando una labor considerable para dar respuesta a esas cuestiones.

Seguridad infantil⁵⁰

90. El Gobierno de Australia colabora con los gobiernos estatales y territoriales y con el sector comunitario para dar aplicación al Marco Nacional para la Protección de los Niños de Australia 2009-2020 a fin de reducir los casos de malos tratos y descuido de niños. Entre los principales logros alcanzados desde 2015 en virtud de los planes de acción tercero (2015-2018) y cuarto (2018-2020), cabe destacar los siguientes:

a) El Principio para el Acogimiento de Niños Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (mencionado anteriormente);

b) Los Principios Nacionales para la Seguridad de los Niños en las Instituciones, que promueven un enfoque coherente a nivel nacional en lo referente a la seguridad y el bienestar infantiles en todos los sectores; y

c) La Solución Nacional para el Intercambio de Información sobre Protección Infantil, que mejora el intercambio de información entre jurisdicciones.

91. Pese a los esfuerzos del Gobierno, el número de niños en modalidades de acogimiento fuera del hogar se ha mantenido estable durante los últimos cinco años. El Gobierno de Australia colabora con las partes interesadas, incluido el Comisionado Nacional para la Infancia, para diseñar una nueva estrategia que sustituya al Marco Nacional, que dejará de estar en vigor en junio de 2021. Esto ofrecerá una oportunidad para reflexionar sobre la comparecencia de Australia ante el Comité de los Derechos del Niño en 2019 y para examinar la manera en que se tienen en cuenta las opiniones de los niños en las decisiones que les afectan. La evaluación del Marco Nacional realizada en 2020 también servirá de base para la formulación del nuevo marco.

92. La Comisión Real sobre las Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, creada por el Gobierno de Australia en 2013, presentó su informe final en diciembre de 2017, el cual contenía 409 recomendaciones sobre cómo prevenir este tipo de abuso en entornos institucionales y darle una mejor respuesta. Los gobiernos de Australia han hecho importantes progresos en la aplicación de las recomendaciones. Cada año se publican en línea informes sobre los progresos realizados.

93. En respuesta a las recomendaciones de la Comisión Real, en 2018 el Gobierno de Australia creó la Oficina Nacional de Seguridad del Niño para coordinar a nivel nacional la formulación y ejecución de iniciativas destinadas a aumentar la seguridad de los niños, centrándose en la prevención del abuso sexual infantil. La Oficina está subordinada al Primer Ministro. Entre las principales iniciativas cabe destacar los Principios Nacionales para la Seguridad de los Niños en las Instituciones, el Marco Federal para la Seguridad del Niño y la elaboración de una Estrategia Nacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

94. El Gobierno de Australia también ha prometido financiación para el establecimiento del Centro Nacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y ha colaborado con los Gobiernos de los estados y territorios para definir, por medio de las Normas Nacionales para el Control sobre el Trabajo con Niños, unos parámetros coherentes a nivel nacional para investigar los antecedentes de las personas que deseen desempeñar trabajos que guarden relación con la infancia.

95. Desde 2015, el Gobierno de Australia ha aprobado varias leyes que refuerzan el marco federal relativo a los delitos relacionados con el abuso sexual infantil en el extranjero, el matrimonio forzado, el abuso sexual infantil en línea y las nuevas tendencias en lo que se

refiere a las imágenes y actividades que impliquen el abuso sexual infantil⁵¹. Entre los programas del Comisionado de Seguridad Electrónica se encuentran un plan sobre el ciberacoso dirigido a los niños australianos menores de 18 años; un plan sobre el abuso basado en imágenes dirigido a los australianos de todas las edades; y el establecimiento del equipo Cyber Report, que investiga los contenidos ilegales y nocivos y prioriza la investigación de los que muestran casos de abuso sexual infantil. En 2018, el Gobierno de Australia también creó el Centro Australiano de Lucha contra la Explotación Infantil para impulsar una respuesta nacional colaborativa a la explotación y el maltrato de niños en Australia.

Justicia juvenil y detención de menores⁵²

96. Los gobiernos de los estados y territorios reconocen la importancia de contar con lugares de detención separados para los niños y los adultos, y en la gran mayoría de los casos mantienen tal separación.

97. Los gobiernos de Australia se esfuerzan por mejorar la protección de los niños en los sistemas de justicia juvenil y en los centros de detención de menores. Por ejemplo, en respuesta a las denuncias relativas al grave maltrato de que eran víctimas las personas recluidas en un centro de detención del Territorio del Norte, el Gobierno federal y el gobierno del Territorio del Norte crearon la Comisión Real y Junta de Investigación sobre la Protección y Detención de Niños en el Territorio del Norte, que presentó su informe final, junto con 227 recomendaciones, en noviembre de 2017. Al 20 de julio de 2020, de las 218 recomendaciones que incumbían al Territorio del Norte, 152 se habían aplicado, 63 estaban en curso y 3 todavía no se habían ejecutado (pues para su aplicación era necesario adoptar antes otras medidas). El Gobierno de Australia ha apoyado la mayoría de las 28 recomendaciones sobre las que tenía competencia exclusiva o compartida: 8 se han completado o no requieren la adopción de más medidas; 13 avanzan correctamente; y la aplicación de 5 se ha encomendado al gobierno del Territorio del Norte o depende de él. El Gobierno de Australia seguirá colaborando con los interesados pertinentes para aplicar las recomendaciones.

Edad de responsabilidad penal⁵³

98. En todas las jurisdicciones australianas, la edad mínima de responsabilidad penal se sitúa actualmente en los 10 años. Existe una presunción de ley que establece que los niños de entre 10 y 14 años no tienen responsabilidad penal (*doli incapax*), lo que significa que la acusación debe probar, más allá de toda duda razonable, que el niño era consciente de que su conducta era ilícita. Observando que cada jurisdicción es responsable de establecer por ley la edad mínima de responsabilidad penal, el Consejo de Fiscales Generales estableció un grupo de trabajo interjurisdiccional en noviembre de 2018 para estudiar la posibilidad de elevar la mayoría de edad penal. El 27 de julio de 2020, el Consejo de Fiscales Generales señaló la necesidad de seguir trabajando antes de adoptar una decisión respecto de la modificación de la edad de responsabilidad penal, incluido el establecimiento de procesos y servicios adecuados para los niños que presenten conductas delictivas. El Territorio del Norte se ha comprometido de manera independiente a elevar a los 12 años la edad de responsabilidad penal.

D. Derechos de la mujer

Igualdad de género, equidad salarial y seguridad económica de las mujeres⁵⁴

99. El Gobierno de Australia ha publicado la Declaración sobre la Seguridad Económica de la Mujer de 2020. La declaración de 2020 es una actualización de la publicada en 2018, en virtud de la cual se proporcionaban 119 millones de dólares en un período de cuatro años (de 2018-2019 a 2022-2023) para financiar 17 iniciativas destinadas, entre otras cosas, a aumentar la flexibilidad de la licencia parental remunerada; prestar apoyo a las mujeres para que prosigan su trayectoria profesional tras las interrupciones relacionadas con el cuidado de otra persona; restablecer la encuesta sobre el uso del tiempo para ayudar a medir la seguridad

económica de las mujeres; y mejorar la labor de recopilación de datos del Organismo para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo.

100. Este organismo promueve la igualdad de género en los lugares de trabajo de Australia, para lo cual proporciona asesoramiento y asistencia a los empleadores y evalúa los datos relativos a cuestiones de género en el lugar de trabajo. Los datos longitudinales obtenidos tras un período de seis años muestran un fuerte incremento de las medidas adoptadas por los empleadores en relación con la igualdad de género, lo que se ha traducido en una mejora de los resultados en materia de igualdad de género. También ha aumentado el número de mujeres que han pasado a ocupar cargos directivos, así como el interés de los empleadores en promover el trabajo flexible.

101. Antes de la pandemia de COVID-19, Australia avanzaba en la dirección correcta para corregir la disparidad salarial por razón de género. En noviembre de 2019, había alcanzado un mínimo histórico del 13,9 %⁵⁵, pero en mayo de 2020 había vuelto a aumentar hasta el 14,0 %. El Gobierno de Australia ha adoptado un enfoque holístico para hacer frente a los complejos factores que causan la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto incluye medidas destinadas a apoyar a las mujeres para que accedan a sectores en los que están infrarrepresentadas, como los relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y aumentar su participación en el trabajo remunerado.

102. En un examen independiente de los ingresos tras la jubilación, se analizó la situación actual del sistema y cuál será su desempeño en el futuro, en particular para las mujeres. El informe sobre el examen se presentó al Gobierno en julio de 2020.

103. El Gobierno de Australia sigue de cerca los efectos de la pandemia de COVID-19 relacionados específicamente con el género y adopta medidas al respecto. Cuando Australia reabra su economía, habrá oportunidades para combatir las desigualdades de género y los obstáculos que impiden la plena participación de las mujeres en la sociedad y economía australianas.

E. Derechos de las personas con discapacidad⁵⁶

104. La Estrategia Nacional sobre la Discapacidad 2010-2020 es el marco general de políticas de Australia y el principal mecanismo del país para impulsar la elaboración, en todos los niveles de gobierno, de políticas y programas inclusivos que sean compatibles con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad⁵⁷. Entre 2019 y 2020, los gobiernos a nivel federal, estatal y territorial proporcionaron en total unos 47.000 millones de dólares en concepto de apoyo a las seis esferas de resultados de la Estrategia Nacional, a saber: comunidades inclusivas y accesibles; protección de los derechos, justicia y legislación; seguridad económica; apoyo personal y comunitario; aprendizaje y aptitudes; y salud y bienestar.

105. En la actualidad, todos los niveles de gobierno trabajan en la elaboración de una nueva Estrategia Nacional sobre la Discapacidad, cuya publicación está prevista para mediados de 2021. La nueva estrategia se cimentará sobre los logros de la estrategia actual y se centrará en la aplicación y en la mejora de la medición de los resultados. Para su diseño servirán de base los anteriores exámenes de la Estrategia Nacional sobre la Discapacidad y en las observaciones finales formuladas en 2019 por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con la celebración de una segunda fase de consultas públicas en 2020, se garantizará que las personas con discapacidad ocupen un lugar central en el diseño de la nueva estrategia.

106. Australia ha ejecutado gradualmente el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad a fin de mejorar el apoyo que se presta a los australianos con discapacidad considerable o permanente y a sus familias y cuidadores. El Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, cuya metodología es la de un régimen de seguros y no la de un sistema de ayudas sociales, se aleja de manera decisiva de enfoques anteriores, en que los gobiernos financiaban directamente a los proveedores de servicios. El objetivo del Plan es otorgar a las personas con discapacidad considerable o permanente más opciones y un mayor control, al aportarles fondos

directamente para que se procuren los servicios y medios de apoyo que resulten razonables y necesarios para alcanzar sus objetivos y aspiraciones.

107. En junio de 2020, más de 390.000 personas se habían acogido al Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, y para casi 175.000 de ellas esa era la primera vez que recibían ayudas para la discapacidad. El Organismo Nacional del Seguro de Discapacidad, el órgano creado para ejecutar el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, está desarrollando métodos para incluir a las personas con discapacidad en la toma de decisiones, entre otras cosas mediante la organización de foros bimestrales con las organizaciones sectoriales y de defensa de las personas con discapacidad.

108. En 2018, se creó la Comisión de Protección y Calidad del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad de los servicios y medios de apoyo cubiertos por el Plan Nacional, responder a las quejas y los incidentes, regular a los proveedores de servicios y vigilar el cumplimiento de las normas deontológicas y relativas al ejercicio de la profesión.

Participación en la fuerza laboral⁵⁸

109. El Gobierno de Australia está determinado a modificar las actitudes negativas y eliminar los obstáculos que impiden a los australianos con discapacidad y a las personas de edad participar plenamente en el mercado de trabajo. En 2016, la ex Comisionada para la Lucha contra la Discriminación por Discapacidad y por Edad publicó un informe titulado *Willing to Work: National Inquiry into Employment Discrimination against Older Australians and Australians with Disability* (Dispuestos a trabajar: encuesta nacional sobre la discriminación en el empleo de los australianos de edad y los australianos con discapacidad), que contenía 56 recomendaciones para los empleadores y el Gobierno. A fin de aplicar las recomendaciones, el Gobierno de Australia ha reformado el programa de Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad con el objetivo de aumentar la rendición de cuentas, mejorar los resultados y ofrecer a las personas con discapacidad información accesible sobre el programa. Los Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad ofrecen asistencia especializada sobre empleo a más de 272.000 personas en Australia. Más del 46 % de los participantes son mujeres.

110. JobAccess es un centro nacional de información para las personas con discapacidad, los empleadores y los proveedores de servicios y conecta a las personas con mecanismos gratuitos del Gobierno de apoyo al empleo. También se ha creado un Equipo de Tareas sobre Empleo para los Participantes del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad a fin de proporcionar a los participantes medios de apoyo para la búsqueda y la conservación del empleo.

Violencia contra las personas con discapacidad⁵⁹

111. En 2015, la Comisión de Referencias sobre Asuntos Comunitarios del Senado presentó su informe sobre la violencia, el abuso y el descuido de que eran víctimas las personas con discapacidad en entornos institucionales y residenciales. El informe sirvió de base para la formulación del Marco de Calidad y Protección del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad (2017), que constituye un enfoque coherente a nivel nacional respecto de la respuesta a las quejas y los incidentes que han de notificarse, la investigación de los antecedentes de los trabajadores y el uso de prácticas restrictivas.

112. Consciente de la honda inquietud que suscita la violencia contra las personas con discapacidad, en abril de 2019 el Gobierno de Australia creó la Comisión Real sobre la Violencia, el Abuso, el Descuido y la Explotación de las Personas con Discapacidad⁶⁰. La Comisión Real investiga todas las formas de violencia, abuso, descuido y explotación de que son víctimas las personas con discapacidad en todos los entornos y contextos. En su mandato se hace referencia explícita a las obligaciones internacionales que incumben a Australia en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Comisión Real comenzó a celebrar audiencias públicas en septiembre de 2019. Deberá presentar un informe provisional antes del 30 de octubre de 2020 y un informe final a más tardar el 29 de abril de 2022.

113. El Gobierno de Australia reconoce que, en comparación con otras mujeres, las mujeres con discapacidad corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género y que, en su caso, los malos tratos pueden ser más graves y persistentes. De acuerdo con lo indicado en el mandato de la Comisión Real, los comisionados deben tener en cuenta la manera en que las experiencias concretas se ven influidas por el sexo, el género, la identidad de género, la orientación sexual, la condición de intersexualidad, la edad, el origen étnico y la raza y tener presente la situación particular de los aborígenes e isleños del estrecho de Torres y de las personas de entornos cultural y lingüísticamente diversos.

Detención de las personas con discapacidad⁶¹

114. Todos los gobiernos de Australia reconocen que el acceso efectivo de las personas con discapacidad a la justicia es fundamental para garantizar el respeto de sus derechos. Australia está resuelta a impedir que se prive de libertad a un australiano únicamente a causa de su discapacidad. No obstante, el Gobierno reconoce que existen dificultades particulares por lo que respecta al tratamiento de las personas con discapacidad cognitiva y con una deficiencia de salud mental en el contexto de la justicia penal. Este es un ámbito que está siendo objeto de examen y reformas.

115. En 2015, un grupo de trabajo interjurisdiccional formuló la Declaración Nacional de Principios relativos a las personas que carezcan de capacidad procesal o que sean declaradas no culpables por padecer un trastorno cognitivo o de salud mental (Principios Nacionales)⁶². Los Principios Nacionales reconocen los derechos de las personas con deficiencias cognitivas o de salud mental y tratan de determinar las salvaguardias existentes en todo el proceso judicial y durante los períodos en que dichas personas están sujetas a órdenes. Varios principios tratan la cuestión de la reclusión indefinida de las personas con discapacidad. Los Principios Nacionales han sido suscritos por todos los estados y territorios, excepto Australia Meridional.

116. Los estados y territorios disponen de diversos medios de apoyo para las personas con discapacidad que corren el riesgo de entrar en el sistema de justicia penal y prestan asistencia a las que estén acusadas de un delito, entre otras cosas en la consideración de las medidas sustitutivas del encarcelamiento. Por ejemplo, en 2019, Nueva Gales del Sur creó el Servicio de Asesoramiento para la Justicia, que asigna una persona de apoyo a los jóvenes y adultos con deficiencia cognitiva que estén en contacto con el sistema de justicia penal.

F. Solicitantes de asilo y refugiados

117. El límite establecido en el Programa Humanitario de Australia para 2020-2021 se sitúa en 13.750 plazas. El Gobierno está resuelto a prestar el mejor apoyo posible durante la recesión económica provocada por la COVID-19 para el asentamiento de los inmigrantes humanitarios nuevos y recién llegados. Australia sigue siendo uno de los países de reasentamiento humanitario más generosos del mundo, y mantiene su compromiso a largo plazo con el reasentamiento humanitario. Australia sigue ofreciendo uno de los mayores programas de reasentamiento, tanto en términos absolutos como per cápita. En marzo de 2020, se dejó en gran medida de otorgar visados humanitarios a personas que se encontraban en el extranjero como parte de los esfuerzos del Gobierno por limitar la entrada y la propagación de la COVID-19.

118. El Gobierno de Australia ha cumplido plenamente el compromiso que contrajo durante el EPU de 2015 de dotar al Programa Humanitario de 12.000 plazas adicionales en respuesta a los conflictos en Siria y el Iraq⁶³. Australia también prestó asistencia humanitaria a casi 240.000 desplazados internos y refugiados sirios y a las comunidades de acogida de los países vecinos. Asimismo, brindó apoyo a Jordania y el Líbano para reforzar la resiliencia a largo plazo, centrándose en mejorar las oportunidades educativas y de subsistencia de los refugiados y sus comunidades de acogida.

119. Australia se centra prioritariamente en facilitar el reasentamiento de las mujeres y los niños vulnerables. Para 2019-2020, el Gobierno se ha fijado el objetivo de conceder a este grupo el 20 % de los visados humanitarios otorgados fuera del país, frente al 15 % en 2018-2019, de los cuales se reserva una pequeña cantidad para los menores no acompañados.

En 2018-2019, casi el 40 % de los visados humanitarios se concedieron a personas de entre 0 y 17 años. Este grupo de edad ha sido el beneficiario de la mayor proporción de visados humanitarios anualmente entre 2013-2014 y 2018-2019⁶⁴.

120. Australia facilita desde hace muchos años el reasentamiento de refugiados pertenecientes al colectivo de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, *queer*, intersexuales y de otras identidades (LGBTQI+), que corren un mayor riesgo de sufrir daños. En el Programa Humanitario para 2019-2020, se estableció el objetivo de asignar por lo menos 100 plazas a este colectivo.

121. El Marco de Protección de la Infancia del Departamento del Interior, revisado en 2019, resume la manera en que el Departamento protegerá la infancia en la ejecución de los programas de inmigración. El marco está en consonancia con el Marco Federal para la Seguridad del Niño, en el que se cita la Convención sobre los Derechos del Niño⁶⁵. El Departamento selecciona al personal y los contratistas apropiados y facilita a los empleados públicos competentes información y formación sobre la protección y el bienestar de la infancia⁶⁶.

122. Australia se toma en serio sus obligaciones en materia de derechos humanos, entre ellas las relacionadas con los derechos a la libertad personal y a la protección contra la detención arbitraria. El Gobierno de Australia también asume con seriedad su responsabilidad, ante la población australiana, de administrar un sistema de migración ordenada, lo que constituye un aspecto esencial de la soberanía nacional. Un no ciudadano que no posea un visado válido es un no ciudadano en situación ilegal y debe ser detenido en virtud de la Ley de Migración de 1958 (ley federal). Para determinar si se debe recluir a una persona en un centro de detención de inmigrantes, se utiliza un enfoque basado en los riesgos. Desde 2008, la política del Gobierno de Australia requiere que la reclusión (en un centro de detención de inmigrantes) sea una medida de último recurso en la gestión de los casos de no ciudadanos en situación ilegal.

123. En virtud de la Ley de Migración, no existe un límite para la duración de la detención, sino que esta termina cuando la persona recibe un visado o es expulsada de Australia. Las evaluaciones se realizan lo más rápidamente posible a fin de minimizar la duración de la detención⁶⁷. El Gobierno de Australia facilita y mantiene el acceso de los detenidos a representantes legales para que puedan resolver con prontitud su situación migratoria. Australia no procede a la devolución de personas cuando esto conlleve su regreso a situaciones incompatibles con nuestras obligaciones en materia de protección internacional y no devolución⁶⁸.

124. La detención de niños por motivos de inmigración es siempre una medida de último recurso y se aplica durante el menor tiempo posible⁶⁹. La política del Gobierno de Australia es no recluir a los niños en centros de detención de inmigrantes. En caso de que un niño sea detenido, este es alojado en un lugar de detención alternativo, como un recinto de viviendas para familias de inmigrantes, o en la comunidad, con arreglo a una medida de determinación de la residencia. En algunas circunstancias, por ejemplo en casos de expulsión en el aeropuerto o cuando existen consideraciones de índole penal o de seguridad, es posible que se proceda a la reclusión temporal de niños en centros de detención de inmigrantes.

125. La red de centros de detención de inmigrantes del Gobierno de Australia está sujeta al control independiente de diversos órganos⁷⁰, y los informes resultantes se tratan con seriedad y todas las recomendaciones se toman en consideración⁷¹. El Ombudsman del Commonwealth visita desde 2004 los centros de detención de inmigrantes y desde 2010 los somete a inspecciones periódicas. En calidad de coordinador del mecanismo nacional de prevención y órgano federal de inspección con arreglo a las obligaciones de Australia en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Ombudsman del Commonwealth tiene un mandato amplio que comprende el examen de los centros de detención de inmigrantes.

126. El dispositivo de tramitación regional de las solicitudes de asilo y las personas sujetas a él son responsabilidad de los Gobierno de Nauru y de Papua Nueva Guinea. Australia sigue prestando apoyo a los Gobiernos de Nauru y Papua Nueva Guinea para el funcionamiento de dicho dispositivo, entre otras cosas mediante la contratación de especialistas para la prestación de servicios. Ninguna de las personas trasladadas a Nauru y Papua Nueva Guinea

en el marco del dispositivo para la tramitación regional de las solicitudes de asilo se encuentra detenida. El dispositivo de la provincia de Manus (Papua Nueva Guinea) ya no está en funcionamiento y, en la actualidad, las personas trasladadas allí residen en la comunidad, en Port Moresby.

Acceso de los niños refugiados y solicitantes de asilo a la atención de la salud y la educación⁷²

127. Los niños que residen en la comunidad y tienen un visado transitorio pueden acceder a los servicios de salud, incluidos los servicios de medicina general y el sistema hospitalario público. Para algunos titulares de visados transitorios, como los niños solicitantes de asilo, esto significa que pueden optar a la cobertura Medicare. Los servicios de atención de la salud para los niños sujetos a una medida de determinación de la residencia son comparables a los que se ofrecen a la población australiana. En situaciones en que se decreta una medida de determinación de la residencia respecto de un niño, se contrata a proveedores de servicios para brindarle servicios sanitarios, educativos, recreativos y culturales apropiados para su edad. Tanto los niños que se encuentran en centros de detención de inmigrantes como aquellos que residen en la comunidad tienen acceso a los servicios de salud necesarios. Todos los estados y territorios de Australia han anunciado públicamente que eximirán a los pacientes con determinados tipos de visado, incluidos los niños con visados transitorios, del pago de los gastos relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de la COVID-19.

128. Todos los niños en edad escolar, independientemente de su situación migratoria, discapacidad o necesidades de aprendizaje, tienen acceso a la educación, en consonancia con las normas comunitarias y la legislación australianas, mientras se resuelve su situación migratoria.

G. Orientación sexual, identidad de género e intersexualidad

129. En diciembre de 2017, el Parlamento de Australia aprobó legislación para modificar la Ley de Matrimonio de 1961 (ley federal) a fin de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto se produjo como resultado de un plebiscito democrático en el que todos los adultos australianos tuvieron la oportunidad de apoyar o rechazar el cambio legislativo propuesto. Más de 12 millones de australianos (casi el 80 % de la población con derecho a voto) participaron en el plebiscito, y más del 60 % votaron a favor del cambio en la ley. Australia también reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero⁷³.

130. Paralelamente, se habían emprendido iniciativas para proteger a las personas frente a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y condición de intersexualidad mediante la introducción en 2013 de modificaciones a la Ley de Lucha contra la Discriminación Sexual de 1984. En su momento, se concedieron a los estados y territorios exenciones temporales a la aplicación de estas medidas de protección a fin de facilitar la modificación de sus respectivas leyes. Estas exenciones expiraron entre julio de 2016 y julio de 2017⁷⁴.

131. En algunos estados y territorios se ha aprobado legislación para prohibir el vilipendio por motivos de orientación sexual, identidad de género o condición de intersexualidad.

H. Derechos de los australianos de edad⁷⁵

132. Australia está resuelta a promover y proteger los derechos de las personas de edad en los planos internacional y nacional. Australia ha colaborado en la labor del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento y de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad de las Naciones Unidas.

133. En los últimos años, una serie de exámenes a que fueron sometidos los servicios de asistencia a las personas de edad han revelado en el sistema problemas que ocasionaron lagunas en la atención y la reglamentación en todo el sector. Esto ha dado lugar a la creación de la Comisión para la Calidad y la Seguridad de la Asistencia para las Personas de Edad,

que es la entidad nacional reguladora y punto de contacto para los usuarios que deseen plantear sus inquietudes respecto de los servicios de asistencia a las personas de edad que reciben; a la creación de nuevas normas de calidad relativas a la asistencia a las personas de edad; al establecimiento de una única Carta de Derechos Relativos a la Asistencia a las Personas de Edad; a la formulación de un Plan de Respuesta a Incidentes Graves; y al estudio de la posibilidad de reformar las leyes relativas a los poderes de representación legal duraderos.

134. En 2018, el Gobierno de Australia también creó la Comisión Real acerca de la Calidad y la Seguridad de la Atención a las Personas de Edad, que está investigando cuál es la auténtica magnitud de los problemas relacionados con la asistencia a las personas de edad en entornos residenciales y domiciliarios. Los comisionados presentaron un informe provisional en octubre de 2019 en el que, aunque no se formulan recomendaciones concretas, se pone de relieve la urgente necesidad de reducir los tiempos de espera para recibir los paquetes de asistencia domiciliaria, hacer frente al uso excesivo de la contención farmacológica en los servicios de asistencia a las personas de edad y poner freno a la entrada de personas jóvenes con discapacidad en las residencias para personas de edad. En noviembre de 2019, el Gobierno anunció la asignación de 537 millones de dólares para atender las cuestiones y esferas prioritarias señaladas en el informe provisional. El informe final deberá presentarse, a más tardar, el 26 de febrero de 2021.

135. En respuesta a las recomendaciones formuladas en un informe de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia, el Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Respuesta a los Abusos contra los Australianos de Edad (Abuso de Personas de Edad) 2019-2023. Se han asignado fondos para poner a prueba y evaluar las dependencias especializadas de atención a las personas de edad víctimas de abusos, las alianzas entre los sectores sanitario y judicial, la coordinación asistencial y los servicios de mediación, y para emprender el primer estudio de Australia sobre la prevalencia del abuso de personas de edad. El Gobierno de Australia también creó la línea telefónica de atención a las personas de edad víctimas de abusos y materiales informativos para ayudar a la comunidad a detectar casos de abuso de personas de edad y proteger a este grupo de población.

136. En el marco del paquete de medidas “Más Opciones para una Vida más Longeva”, el Gobierno incrementará los fondos que destina a las personas de edad de Australia en 7.000 millones de dólares durante un período de cinco años. El paquete contiene 42 medidas destinadas, entre otras cosas, a mejorar la participación en la fuerza laboral; la planificación temprana en materia de salud, trabajo, finanzas y conexión social; y el acceso a los servicios de salud, salud mental y asistencia para las personas de edad.

137. En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Australia ha anunciado un importante paquete de medidas que apoyan directamente a los australianos mayores, incluidos los beneficiarios de servicios de asistencia a personas de edad.

V. Cuestiones nuevas y emergentes

Respuesta del Gobierno de Australia a la COVID-19

138. El Gobierno de Australia es consciente de las repercusiones que la pandemia de COVID-19 está teniendo en los derechos humanos. Australia observa con preocupación el efecto desproporcionado de la pandemia en los grupos vulnerables y sigue vigilando de cerca la situación y dando a los problemas que van surgiendo una respuesta proporcional al nivel de riesgo y compatible con los derechos humanos.

139. El Gabinete Nacional, formado por el Primer Ministro del país y los Primeros Ministros de los estados y territorios, es el encargado de dirigir la respuesta de Australia a la COVID-19. El Gabinete Nacional recibe asesoramiento médico especializado de los Directores de los Servicios Sanitarios de cada estado y territorio, del Director del Servicio Médico de Australia y de representantes de los departamentos del Gobierno.

140. Se ha creado un Grupo Asesor sobre la COVID-19 para los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, encargado de formular y ejecutar un Plan de Gestión para los

Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres y aplicar el Plan de Respuesta en Casos de Emergencia del Sector Sanitario de Australia.

141. La respuesta de Australia comprende una serie de medidas destinadas a mitigar los efectos de la COVID-19 en la salud, la sociedad y la economía, entre ellas medidas para reforzar los servicios de telemedicina y de salud mental, el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y la seguridad social.

142. El Gobierno de Australia ha introducido un paquete de medidas de apoyo económico en el contexto de la COVID-19 dotado de 305.000 millones de dólares, lo que representa la respuesta financiera de mayor envergadura en la historia del país. Dos de sus elementos centrales han sido el programa de pagos JobKeeper, para la conservación del empleo, y un Paquete de Medidas de Socorro para el Sector de la Atención y la Educación de la Primera Infancia, para ayudar a los servicios de atención de la infancia a permanecer abiertos y ofrecer a las familias que lo necesiten servicios gratuitos de guardería. El Gobierno de Australia también se ha esforzado en derivar al considerable número de nuevos solicitantes de empleo a los servicios de apoyo adecuados.

143. Un Paquete de Medidas de Apoyo a la Comunidad dotado de 200 millones de dólares proporciona financiación a las organizaciones benéficas y comunitarias que ofrecen asistencia de emergencia, socorro alimentario, asesoramiento financiero y préstamos sin intereses. De ese paquete, 13 millones de dólares se han destinado a facilitar el acceso de los titulares de visados temporales a servicios de asistencia de emergencia hasta diciembre de 2020.

144. La información y los folletos relativos a las medidas sanitarias y económicas y a los recursos disponibles para las empresas se tradujeron rápidamente del inglés a otros 63 idiomas y se distribuyeron ampliamente entre organizaciones comunitarias multiculturales. El Gobierno de Australia también puso en marcha la Campaña Informativa para el Fortalecimiento de la Cohesión Social con el fin de dar apoyo a las comunidades multiculturales más afectadas por el racismo relacionado con la COVID-19.

145. Para apoyar a las personas con discapacidad, el Gobierno de Australia aplica una serie de medidas, entre ellas el establecimiento de un servicio de información telefónica sobre discapacidad, la elaboración de materiales accesibles con consejos sobre la COVID-19 y el pago anticipado a los proveedores de servicios de empleo para personas con discapacidad. El Gobierno de Australia adoptó varias medidas para asegurar la continuidad del apoyo prestado por el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, entre las que se encuentran la flexibilidad en el uso de los fondos para adquirir tecnologías de apoyo de bajo costo, el acceso prioritario a los servicios de entrega a domicilio de los supermercados y el contacto telefónico proactivo con más de 73.000 afiliados vulnerables a fin de cerciorarse de que tenían los medios de apoyo que necesitaban. El Gobierno también pagó por anticipado más de 666 millones de dólares a los proveedores asociados al Plan Nacional de Seguro de Discapacidad y aumentó los precios máximos establecidos a fin de garantizar la viabilidad dichos proveedores y la continuidad de los servicios prestados a los afiliados.

146. El Gobierno de Australia está decidido a garantizar la salud y seguridad de los detenidos y ha tomado medidas para prevenir la entrada y propagación de la COVID-19 en los centros de detención de inmigrantes de toda Australia.

147. Las restricciones para viajar, que se consideran necesarias para proteger el derecho a la salud, son objeto de constante revisión.

Notas

¹ Recommendation 66.

² For further information on Australia's constitutional framework, please refer to Australia's first and second cycle UPR reports.

³ The states are New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria and Western Australia. The two internal territories are the Australian Capital Territory and the Northern Territory.

⁴ Protected attributes at the federal level include age, disability, sex, race and sexual orientation, gender identity and intersex status. States and Territories have laws preventing discrimination on the basis of these attributes as well as others. Recommendations 117–121, 124 and 126.

- ⁵ Recommendation 64.
- ⁶ Voluntary Pledge 5.4 – HRC membership.
- ⁷ Voluntary Commitment 9 - Second cycle UPR. The website was updated as part of Australia’s mid-term UPR review in 2018.
- ⁸ Recommendations 3–29.
- ⁹ Voluntary commitment 11 – second cycle UPR.
- ¹⁰ Recommendation 60. Australia has submitted reports to and appeared before the Human Rights Committee and the Committees on the Elimination of Racial Discrimination; Economic, Social and Cultural Rights; Elimination of Discrimination against Women; Rights of the Child; and Rights of Persons with Disabilities.
- ¹¹ Special Rapporteur on the situation of human rights defenders (4–18 October 2016); Special Rapporteur on the human rights of migrants (1–18 November 2016); Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (28 November–5 December 2016); Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences (13–27 February 2017); Special Rapporteur on the rights of Indigenous peoples (20 March–3 April 2017).
- ¹² Recommendations 61–62.
- ¹³ Recommendation 63.
- ¹⁴ Voluntary Pledge 3.4 – HRC membership.
- ¹⁵ Recommendations 130, 132, 133, 135 and 137–140.
- ¹⁶ Recommendation 63 and Voluntary Pledge 3.1 – HRC membership.
- ¹⁷ Recommendations 125, 128–135, 137–139. Voluntary Pledge 6.7 – HRC membership.
- ¹⁸ Recommendations 153–164.
- ¹⁹ 2016 Personal Safety Survey.
- ²⁰ Australian Institute of Health and Welfare, *Family, Domestic and Sexual Violence in Australia 2019*.
- ²¹ 2016 Personal Safety Survey.
- ²² Australian Institute of Health and Welfare compendium Family, domestic and sexual violence in Australia: continuing the national story 2019.
- ²³ Voluntary commitment 3 – Second cycle UPR.
- ²⁴ Recommendations 21–27, 200 and 267–268.
- ²⁵ Recommendations 226–227 and 229.
- ²⁶ Recommendations 230–233.
- ²⁷ Recommendation 232; Voluntary Pledge 6.8 – HRC membership. See Annex 3 for further information.
- ²⁸ Recommendations 78–80.
- ²⁹ Recommendations 84–86.
- ³⁰ Recommendations 74–76, 85 and 116. Voluntary Pledges 4.5 and 4.6 – HRC membership.
- ³¹ Recommendations 88–90.
- ³² Recommendations 93–98.
- ³³ Recommendations 88–90.
- ³⁴ Recommendation 167.
- ³⁵ Recommendation 97.
- ³⁶ Recommendations 107–112 and 211.
- ³⁷ Australian Institute of Health and Welfare 2019. Tracking progress against the Implementation Plan goals for the Aboriginal and Torres Strait Islander Health Plan 2013-2023.
- ³⁸ Recommendation 210.
- ³⁹ Recommendations 112, 113 and 203–205.
- ⁴⁰ As at 30 June 2018.
- ⁴¹ Australian Bureau of Statistics, Prisoners in Australia (2019); in 2019 there were 1,158 Indigenous female prisoners nationally.
- ⁴² Recommendations 76, 92, 93, 99, 100, 103, 105, 107–110, 112, 127 and 136.
- ⁴³ As at July 2020.
- ⁴⁴ Recommendations 101–102 and 171.
- ⁴⁵ Recommendations 88–90.
- ⁴⁶ Recommendations 114–115.
- ⁴⁷ Recommendations 113 and 122.
- ⁴⁸ Australian Institute of Health and Welfare in 2020, Child protection Australia 2018-19.
- ⁴⁹ Recommendations 166 and 169–170.
- ⁵⁰ Recommendation 168.
- ⁵¹ These include the *Crimes Legislation Amendment (Sexual Crimes Against Children and Community Protection Measures) Act 2020*, the *Combating Child Sexual Exploitation Legislation Amendment Act 2019*, the *Passports Legislation Amendments (Overseas Travel by Child Sex Offenders) Act 2017*, and the *Criminal Code Amendment (Protecting Minors Online) Act 2017*.
- ⁵² Recommendations 172–173 and 175.

-
- ⁵³ Recommendations 178–179.
- ⁵⁴ Recommendations 141–149; 151–152.
- ⁵⁵ There are multiple gender pay gap measures. This measure is the average weekly ordinary time earnings gender pay gap for full-time adult employees. Data available from: Average Weekly Earnings, Australia, Nov 2019.
- ⁵⁶ Recommendations 185 and 188. Voluntary Pledge 6.9 – HRC membership.
- ⁵⁷ Recommendation 186.
- ⁵⁸ Recommendation 190.
- ⁵⁹ Recommendations 188, 191.
- ⁶⁰ Recommendations 197–198.
- ⁶¹ Recommendations 192–194 and 196.
- ⁶² Voluntary commitment 4 – second cycle UPR.
- ⁶³ Voluntary commitment 2 – second cycle UPR.
- ⁶⁴ Voluntary Pledge 6.6 – HRC membership.
- ⁶⁵ Recommendation 266.
- ⁶⁶ Recommendation 234.
- ⁶⁷ Recommendations 269–272.
- ⁶⁸ Recommendations 277 and 281–283.
- ⁶⁹ Recommendations 255–259 and 261.
- ⁷⁰ These include the Office of the Commonwealth Ombudsman, the Australian Human Rights Commission, the Australian Red Cross and international human rights organisations including the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and International Committee of the Red Cross.
- ⁷¹ Recommendations 254 and 267.
- ⁷² Recommendation 235.
- ⁷³ Recommendations 220, 222 and 223–224.
- ⁷⁴ Recommendation 221. Voluntary commitment 7 – Second cycle UPR.
- ⁷⁵ Voluntary commitment 6 – second cycle UPR.
-